

Conflicto en el tropico Boliviano

Refiriéndose a la prohibición de cultivos de amapola impuesta en Afganistán por el ahora extinto régimen Talibán, un alto funcionario del UNDCP dijo en su momento que, en términos del control de drogas fue un éxito sin precedentes, pero en términos humanitarios un enorme desastre. Algo similar podría decirse de Bolivia. La importante reducción de la superficie de coca cultivada llevada a la práctica en el marco del llamado Plan Dignidad, si bien da cuenta del éxito local de una política, tal 'éxito' ha sido logrado a costa de la pauperización, y criminalización del campesinado cocalero boliviano.

El actual presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, es el arquitecto del Plan Dignidad, estrategia antinarcótica creada en 1998 y encaminada a suprimir toda la coca ilegal del país. La introducción de esta estrategia marcó una enorme diferencia entre la erradicación de coca antes y después de su implementación. Antes de que el plan se hiciera efectivo, Bolivia era la segunda fuente mundial de cocaína. En el año 2000, los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína en Bolivia alcanzaron sus niveles más bajos desde que el gobierno estadounidense comenzara a medirlos en 1985. Según el gobierno boliviano, en estos momentos ya se ha erradicado más del 90 por ciento de los cultivos ilícitos de coca de todo el país. De acuerdo a un estudio reciente del ministerio alemán de cooperación GTZ* sobre el caso de Bolivia en el marco del tema drogas y desarrollo en América Latina, la reducción acelerada de los cultivos ha sido posible gracias a las intervenciones masivas de tipo policial y militar en el Chapare, a las violaciones diarias a los derechos humanos, a los muertos y heridos, a una destrucción de las bases para la negociación con las asociaciones de campesinos, y a que las compensaciones a la comunidad por erradicación voluntaria no se han hecho efectivas. Todo lo cual ha generado una polarización del conflicto.

El "éxito" del modelo boliviano se desdice además en el evidente fracaso de la región andina en su conjunto. El área actual de cultivos de coca en Colombia es tres veces mayor de lo que alcanzó a ser en Bolivia en los años de más florecimiento.

Principales problemas en Bolivia

- Una acelerada erradicación de los cultivos de coca ha conducido al empobrecimiento y criminalización de los campesinos cocaleros.
- Intervenciones masivas de tipo policial y militar en el Chapare con violaciones de los derechos humanos.
- Fracaso de los programas de desarrollo alternativo.
- Polarización del conflicto.

Recomendaciones de cambio

- El gobierno debería tratar la producción de coca con mayor autonomía de la política antinarcótica estadounidense.
- Desmilitarización de las regiones cocaleras.
- Reestructuración de programas de desarrollo alternativo, crear mercados, y salidas a los centros consumidores.
- Desarrollo alternativo debe contar con la participación de las organizaciones campesinas y su visión sobre el mejor uso de los recursos de la región.
- Separar erradicación forzosa de desarrollo alternativo.

La reducción relámpago de la coca sin el necesario acompañamiento en este proceso de medidas eficaces de desarrollo alternativo, equivale a una bomba de tiempo política, particularmente en medio de la actual crisis económica y social por la que atraviesa el país. La política de drogas impuesta por EEUU a Bolivia tiene ahora sumido el Chapare boliviano en un tumultuoso conflicto. La erradicación forzosa de los cultivos de coca ha generado en los últimos meses continuas protestas, huelgas y bloqueos de carreteras por parte de los cocaleros y otros trabajadores de la región, acciones que han sido reprimidas de manera violenta por el gobierno y las fuerzas militares y policiales. Unas 36 mil familias cocaleras que no cuentan con otro modo de subsistencia piden que se le permita a cada familia el mantenimiento de un *k'ato* de coca (40 por 40 m). La actitud intransigente del gobierno ante esta petición se expresa perfectamente en la declaración hecha por el ministro boliviano de Justicia y Derechos Humanos, de que para el gobierno lo prioritario en este momento, por encima mismo de los derechos humanos, es la erradicación de cocales para alcanzar el objetivo "cero coca" del Plan Dignidad.

El pasado 18 de octubre, cuando una asamblea de cultivadores decidió hacer un bloqueo de carreteras como protesta, el presidente Quiroga anunció que impondría una política de hierro en el Chapare. Efectivamente, la protesta organizada para el 6 de noviembre fue duramente reprimida por las fuerzas militares y policiales. Desde entonces el conflicto ha seguido agudizándose.

Fracaso de los programas de desarrollo alternativo

En 1988, Bolivia promulgó la Ley 1008 (Del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), redactada con la ayuda de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (AID) y ratificada rápidamente por el Congreso boliviano, para hacer frente al narcotráfico y a la producción de hoja de coca.

Que esta Ley haya sido objeto de fuertes críticas debido a las provisiones inconstitucionales que contiene, o a la prontitud de su aprobación sin que los diputados hubieran tenido tiempo de examinarla detenidamente, o al riesgo de que su aplicación indujera a violaciones a los derechos humanos – como efectivamente ha sucedido – o en general al carácter draconiano de algunas de las medidas que propone, es algo que ya no se debate. La ley boliviana permite el cultivo legal de coca en áreas especificadas como "tradicionales", en Las Yungas, para uso doméstico (té, coca para mascar) para satisfacer costumbres ancestrales. De acuerdo a la Ley 1008, buena parte de la coca del Chapare se consideraba de "exceso y transición", por tanto estaba destinada a ser gradualmente erradicada. En su lugar los campesinos de la región recibirían financiamiento y asistencia para programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Desafortunadamente los aspectos positivos que puede tener también la Ley 1008 - que considera la participación e integridad de la comunidad - no lograron realizarse, quedando esta posibilidad ahora completamente excluida con la implementación posterior del Plan Dignidad, estrategia cuyo principal objetivo es la rápida eliminación de la coca a cualquier precio.

El 6 de diciembre pasado, día en que el líder sindical Casimiro Huanca fue asesinado por las fuerzas de seguridad, los cocaleros se encontraban realizando una protesta para la cual habían traído sus cargas de piñas y bananas podridas, producto de la última cosecha que acababa de perderse al no tener mercados de salida donde venderla. No es casual, y sí muy significativo, que las circunstancias del asesinato del líder sindical estén relacionada directamente con el fracaso de los programas de desarrollo alternativo.

Mientras el gobierno espera que los campesinos del Chapare cumplan con el requisito de erradicación que estipulan la Ley 1008 y el Plan Dignidad para esa región, en cambio por su parte no parece estar dispuesto a reconocer el fracaso de la alternativa de subsistencia también propuesta por esta Ley para los campesinos.

La realidad de los programas de desarrollo alternativo, en su forma actual, es que éstos no ofrecen ninguna solución para la economía campesina, porque no están diseñados para cubrir sus necesidades, además de que muchos de estos programas no toman en cuenta la visión de los campesinos sobre el uso de los recursos, ni consideran un manejo integral de los recursos del trópico, y en cambio promueven monocultivos, la ganadería extensa, y una dependencia de mercados que no ofrecen seguridad de exportación.

Desarrollo alternativo tiene que ver con infraestructura, cosechas anuales, exportación de productos, y consideraciones sociales y medioambientales. La completa erradicación como prerrequisito para recibir ayuda en desarrollo alternativo ha dejado a las familias sin medios de subsistencia mientras esperan los resultados de los cultivos alternativos.

Hasta el momento no se ha encontrado un cultivo económica, ecológica y socialmente viable, capaz de competir con la hoja de coca para disminuir la dependencia económica exclusiva de la coca. Las frutas tropicales que se han cultivado en su reemplazo no han tenido salida en un mercado supersaturado e incapaz de competir globalmente. Los costos de transporte, mantenimiento y asistencia técnica son más altos que el ingreso que generan los productos tropicales. La piña, maracuyá, pimienta negra, naranja, no han logrado producir los beneficios prometidos a más allá de un pequeño porcentaje de familias. ¿Qué va a pasar con la gran mayoría de campesinos y sus familias, que se han quedado sin trabajo, sin ingresos y en parte sin tierras debido a la falta de alternativas reales para el cultivo de la coca? Es uno de los interrogantes que plantea el estudio antes citado de GTZ ante el evidente fracaso del desarrollo alternativo en el Chapare.

Movimiento cocalero

Al fracaso de los programas de desarrollo alternativo en sí mismos se le suma el hecho de que el gobierno no quiere trabajar con las asociaciones existentes de campesinos, negativa que ha impedido también cualquier repercusión positiva de los programas. En lugar de las actuales federaciones, el gobierno ha creado asociaciones paralelas de productores que no tienen ninguna base real en el Chapare, afectando la organización política del movimiento cocalero, lo cual parece ser finalmente el verdadero objetivo del Plan Dignidad.

¿Porqué, quedando tan poca coca en Bolivia, el gobierno ha insistido tanto, llegando hasta los extremos de represión vistos en los últimos meses, en la erradicación de las pocas

Aquí juega sin duda un rol la ambición política del presidente Quiroga, a quien le interesa que el 6 de agosto del 2002, fecha de las próximas elecciones, se haya alcanzado la meta "cero coca" y decir que Bolivia ya no hace parte del circuito mundial coca-hay un obstáculo para esto: el movimiento cocalero. El debilitamiento de este incómodo movimiento para los intereses del sector político en el poder se ha ido revelando como la agenda oculta del gobierno. De ahí que se hayan excluido sus federaciones y sindicatos de los programas alternativos, para restarles visibilidad y participación en la actividad económica y social. Y de ahí la represión violenta e injustificada a sus protestas.

Por otra parte, aún en el supuesto de que este gobierno o cualquier otro pudieran avanzar hasta convertir en realidad la cero coca en el Chapare, dada la situación económica del país y de la región, ¿durante cuánto tiempo se sostendría esta situación? Mientras el movimiento cocalero permanezca fuerte, y mientras sigan fracasando los programas de sustitución de cultivos, siempre subsistirá el riesgo de que la coca sea replantada antes de un año, echando a perder las iniciativas de erradicación y la imagen internacional de super-erradicadores que pretende el gobierno. De hecho, de acuerdo a los últimos datos de enero del 2002 sobre el área cultivada actualmente en el Chapare, habría en este momento siete mil hectáreas de coca en la región, haciendo suponer que mucha de la coca que había sido erradicada en los meses anteriores ha sido replantada.

El movimiento cocalero es también un escollo para los Estados Unidos. No es de extrañar pues que su estrategia antinarcótica indirectamente propicie el debilitamiento de las asociaciones con el objetivo de convertir el Chapare en zona agroempresarial en donde solamente existan trabajadores asalariados rurales.

En este marco desolador se ha producido la declaración del líder cocalero Evo Morales de conformar un ejército subversivo para responder a la represión. Tal amenaza no puede interpretarse sino como una expresión de frustración e impotencia frente a la política nacional e internacional implementada en el trópico boliviano, a la vez que una expresión del malestar y preocupación de los pobladores de la región. Pero una resistencia armada organizada no le haría ningún favor al movimiento cocalero, y por el contrario, sólo serviría para justificar acciones más fuertes en su contra.

A todo esto, cabría preguntarse, ¿por qué en Bolivia el narcotráfico es tan poco visible? Es como si los organismos de inteligencia que trabajan en esa área no supieran nada al respecto. Lo interesante es que de vez en cuando estalla algún escándalo como el del famoso 'narcoavión' hace algunos años, en el que se vieron involucradas personas cuyos lazos con el negocio ilícito se conocían desde hacía tiempo. La invisibilidad del narcotráfico en Bolivia sirve a más de un interés, uno de los cuales es poder mantener el énfasis anti el eslabón más débil de la cadena de las drogas que es el de los cultivadores de hoja de coca.

En medio de la crisis social del Chapare, el gobierno de Jorge Quiroga acaba de recibir del Congreso de Estados Unidos 86 millones de dólares más para continuar la política antinarcótica aplicada hasta el momento. Los diálogos entre el gobierno y las asociaciones cocaleras se encuentran congelados por presiones de la embajada estadounidense, que no vio con buenos ojos que se suspendieran durante cuatro días las erradicaciones para proseguir con las conversaciones. El embajador estadounidense Manuel Rocha había amenazado con disminuir la asistencia económica si el país no cumplía con los compromisos del Plan Dignidad. El gobierno ratificó la erradicación forzosa de cultivos y de nada sirvió que los cocaleros cedieran en la mayor parte de sus demandas, incluso la del *k'ato* de coca.

El gobierno boliviano debería asumir una postura más autónoma y firme frente a las continuas imposiciones del gobierno estadounidense en el tema de la coca. Desafortunadamente, mientras el trópico esté militarizado habrá muy pocas posibilidades de encontrar soluciones al conflicto. Desarrollo y ocupación militar son dos realidades que no se concilian demasiado bien. El gobierno boliviano debe entender que si reprime las formas legítimas de protesta se corre el riesgo de que crezca el respaldo a las formas no legítimas. El objetivo "cero coca" del presidente Quiroga y la embajada estadounidense en La Paz, oculta un drama humanitario de imprevisibles consecuencias.

* Drogas y desarrollo en América Latina, GTZ, Alemania septiembre 2001 <http://www.gtz.de/drogen>

Para más información sobre la situación en el Chapare ver las páginas del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) (<http://www.cedib.org/>) y del Red Andina de Información (RAI) (<http://www.scbbs-bo.com/ain/>)

T TRANSNATIONAL INSTITUTE
Paulus Potterstraat, 20
N 1071 DA Amsterdam - Países Bajos
I Tel: + 31 20 662 88 08 | Fax + 31 20 675 71 76 | e-mail drugs@tni.org
<http://www.tni.org/drogas/index.htm>